

La Administración de Justicia suspendió los términos de sus actuaciones desde finales del mes de marzo del año en curso, pero la Dirección de Defensa Judicial de la Secretaría Jurídica del Municipio de Pereira, Risaralda, no ha parado en su labor de atender los diferentes asuntos litigiosos de competencia del Ente Territorial, en compañía de la Dirección de Asuntos Jurídicos están trabajando en el fortalecimiento de la política de prevención de daño antijurídico que rige actualmente al Municipio.

El daño antijurídico se encuentra ínsito a la cláusula general de responsabilidad estatal prevista en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, a partir del cual el establecimiento puede ser condenado por acciones de

DAÑO ANTIJURÍDICO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

sus agentes. En Sentencia C-286 de 2017 la Corte Constitucional a este respecto indicó: "Para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado consagrada en el artículo 90 constitucional es necesaria la comprobación de (a) un daño antijurídico, (b) que le sea imputable al Estado (causalidad jurídica), y que sea (c) producido por una acción u omisión de una entidad pública o de alguno de sus agentes (causalidad material)".

El Municipio de Pereira consciente de los cambios jurídicos avizorados con la declaratoria del Estado de Excepción consagrada en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia relativo

a la Emergencia en Salud para la atención de COVID 19, viene realizando un análisis normativo y estratégico de los cambios legislativos en relación con las formas tradicionales del proceso judicial. De esta manera, el estudio de cada uno de los Decretos Legislativos y Reglamentarios que se han expedido, su clasificación y análisis de impacto respecto a normativa interna consagrada en la Resolución 14.142 de 2019 ha estimulado la elaboración de un plan de acción complementario respecto de la actividad litigiosa en tiempos de pandemia. Para ello no sólo se han depurado las normas procesales que transforman radicalmente la Adminis-

tración Justicia como aquellas que propenden por un expediente digital, la virtualización de las actuaciones procesales y la impersonalidad de las relaciones jurídicas, sino todas aquellas sustanciales que potencializan nuevos conflictos y responsabilidades.

La complejidad y la constante producción de normas jurídicas por el Gobierno Nacional hacen de este trabajo una labor permanente, pero que contribuye a la preparación de la Administración Municipal respecto de cambios que seguramente llegaron para quedarse. El Estado de Excepción constituye una medida transitoria del orden legal, pero sus implicaciones son permanentes, por lo que una adecuada defensa jurídica requiere el reforzamiento de sus actividades preventivas y la correcta planeación de sus líneas estratégicas de trabajo.

DOBLE CONFORMIDAD Y DOBLE INSTANCIA: UN NUEVO CHOQUE DE TRENES EN TIEMPOS DE PANDEMIA

En una polémica decisión de tutela conocida a través de un Comunicado de Prensa del 21 de mayo de 2020, la Corte Constitucional decidió en sede de revisión amparar el derecho fundamental al debido proceso del señor ANDRÉS FELIPE ARIAS LEYVA. Esta determinación fue adoptada en una estrecha votación en la que 5 Magistrados estuvieron a favor de la ponencia presentada por la doctora Diana Fajardo, mientras que los otros 4 juristas salvaron su voto.

El fundamento central de la providencia, según el Comunicado de Prensa, consistió en el amparo al derecho fundamental de la doble conformidad previsto en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, en una postura inédita el Tribunal Constitucional diferenció entre la doble conformidad y la doble instancia, al

tiempo que reafirmó que la decisión judicial privativa de la libertad del exfuncionario público seguía en firme. De igual forma, se adujo por el Guardián Constitucional que el estándar internacional para la aplicación de esta normativa devenía del 30 de enero de 2014, fecha en la que se profirió el fallo del caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para algunos juristas esta decisión genera diversas dudas del derecho procesal constitucional, algunas de ellas, frente al alcance temporal del derecho fundamental, los efectos jurídicos de la decisión respecto de casos equivalentes, sus implicaciones frente a la firmeza de decisiones precedentes y la prescripción de la acción penal. Por ahora el Máximo Tribunal Constitucional ha expresado que esta decisión:

1. “No permite la aplicación de figuras tales como la prescripción de términos de la acción penal, ni ninguna otra derivada del transcurso del tiempo.

2. No tiene como consecuencia conceder la libertad al ciudadano Andrés Felipe Arias Leiva.

3. Y, debe ser cumplida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través de una Sala conformada por magistrados que no se hayan pronunciado previamente sobre este caso y con las garantías propias de un recurso integral”.

La Corte Suprema de Justicia en un Comunicado de Prensa del mismo día expresó lo siguiente: “Bogotá, D.C., jueves 21 de mayo de 2020. La condena contra el ciudadano Andrés Feli-

pe Arias Leiva fue dictada por la Corte Suprema de Justicia en 2014, con riguroso respeto del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el procedimiento dispuesto por la Constitución Política para funcionarios con fuero especial de juzgamiento.

Se le halló responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, en desarrollo de un proceso de única instancia avalado por múltiples decisiones de la Corte Constitucional desde 1991.

Ahora que la Corte Constitucional cambia intempestivamente esas reglas de juego para favorecer exclusivamente al exministro de Agricultura, la Corte Suprema de Justicia acata, pero no comparte, la decisión mayoritaria que ordena tramitar la impugnación de la condena de 17 años de prisión contra Arias Leiva.

Según declaraciones de prensa, el fallo

de tutela sólo favorece al exministro, reconoce la firmeza, legalidad e integridad de la sentencia y no hace juicios de valor sobre los hechos, pruebas y fundamento de la condena en su contra. No obstante, deja un peligroso precedente de incertidumbre en la jurisdicción ordinaria e inseguridad jurídica en la justicia penal.

Con la incondicional defensa de la institucionalidad del país que la caracteriza, la Corte Suprema de Justicia cumplirá la orden de tutela.

En la Corte Constitucional queda la responsabilidad del impacto de las insospechadas consecuencias para el Estado de derecho de esta decisión particular”.

EL choque de trenes por este asunto apenas empieza y el estudio de estas instituciones de derecho constitucional es un tema de vanguardia en tiempos de pandemia.

SECOP II UN NUEVO MUNDO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

La publicidad es uno de los principios de la función pública, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, pero también de la contratación estatal, al tenor de los artículos 23 y siguientes de la Ley 80 de 1993. Desde el año 2007 la Ley 1150 ordenó al Gobierno Nacional desarrollar el Sistema Electrónico para la adquisición de bienes y servicios de los Entes Estatales. En el mismo sentido, la Ley 1712 de 2014 reforzó la perentoriedad de la publicidad del expediente contractual, precisando que todos los documentos de éste deberían ser publicados.

Para tales efectos y, hasta hace muy poco, las Entidades Estatales se encontraban en la obligación de adelantar sus convocatorias públicas a través de lo que se conoce como la Plataforma SECOP I; herramienta que permitía el trámite de las diferentes etapas de las modalidades de selección con

un sistema mixto, predominantemente escrito. Es decir, con este mecanismo de publicidad se permitía el conocimiento digital de las actuaciones contractuales del Estado, pero el expediente original reposa en los archivos de la respectiva Entidad Contratante. La cantidad de documentos impresos y reproducidos era significativa.

Con el advenimiento de la nueva plataforma del SECOP II, la cual entró a regir de manera obligatoria para algunas Entidades Territoriales en forma reciente, se propugna por una transformación del concepto y el impulso del procedimiento administrativo contractual digital. De esta forma se garantizará la publicidad de oferentes, el control ciudadano y la virtualización como vértice del ejercicio público de compras.

El Director de Gestión Contractual de la Secretaría Jurídica del Municipio de Pereira sobre este aspecto expone que: “El sis-

tema de contratación en Colombia viene teniendo unos cambios radicales porque desde que se creó Colombia Compra Eficiente se han venido implementado diferentes plataformas, ya pasamos por el SECOP I y ha entrado el SECOP II. En este último sistema de contratación que va a ir vía electrónica. Este modelo tiene muchos beneficios para las entidades públicas como para los contratistas porque todo se manejará vía virtual. Con él se agilizará mucho la contratación”. Ha sentenciado el funcionario que este nuevo modelo de contratación permitirá una mayor pluralidad de oferentes y agilizará los trámites contractuales.

En tiempos de pandemia es bastante pertinente y oportuno que se avance en procedimientos administrativos virtuales. Por lo anterior la Secretaría Jurídica esta capacitando a los funcionarios y contratistas encargados de la contratación de bienes, obras y suministros en el manejo de

dicha plataforma para así lograr mas transparencia, agilidad en los procesos, ahorro de papel pero sobre todo buscar como ya se indicó mayor pluralidad de oferentes dado que uno de los compromisos del Gobierno de la ciudad es lograr la mayor transparencia en procesos de contratación pública y para la cual se ha realizado diferentes actividades como fueron la feria de compras empresarial en la cual todos los posibles proponentes del Municipio conocieron el plan de compras de la alcaldía para satisfacer las diferentes necesidades.

Las nuevas tendencias virtuales y las decisiones del Gobierno de la Ciudad han permitido que se incremente la pluralidad de oferentes en los procesos de selección que adelanta el Municipio de Pereira. Entre el 1 de enero del 2019 al 30 de mayo se presentaban en promedio por proceso de selección 4.4 oferentes, mientras que en el 2020 en este mismo lapso se cuenta con 6.9 oferentes, con lo que se evidencia la confianza, transparencia y publicidad en los contratos que celebra la Administración Municipal.